

19 de Octubre del presente año, que otorgé el amparo á los quejosos."

Segundo. La Justicia de la Union no ampara ni protege á los Sres. J. Kelly y C^a, F. de la Vega y C^a, F. de la Vega y Francisca N. de Hidalgo, contra el acto del ciudadano administrador de rentas del Distrito de Mazatlan, que rehusa recibirles en moneda de cobre la cantidad de trescientos cuarenta y ocho pesos diez y nueve centavos, en pago de las cantidades que adeudan al Estado.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes: publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos presidente y magistrados que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José Arteaga.*—*M. Auza.*—*Ignacio Ramírez.*—*E. Montes.*—*J. M. Vigil.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. Febrero 12 de 1876.—*Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO.

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, por los Sres. Redo Hernandez y compañía, en representacion de D. Francisco Perez Bustamante, contra el acto del administrador de rentas de Mazatlan, que rehusa recibirles en moneda de cobre, cierta cantidad que daban en pago de derechos y contribuciones.

PEDIMENTO FISCAL.

Ciudadano juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que por las razones y fundamentos legales que tiene ex-

puestos en sus últimos pedimentos, principalmente en el que presentó ayer, relativo al amparo que solicitan los Sres. Koerdolly C^a, y M. Arreola y C^a, que dá aquí por reproducidos; es de parecer que no debe ampararse á los Sres. Redo Hernandez y C^a y Juan B. Hernandez en representacion de Francisca de P. Bustamante, contra el ciudadano administrador de la aduana terrestre, que se niega á recibirles en moneda de cobre, la cantidad de mil ciento cuarenta y cuatro pesos noventa y dos centavos, importe de varias contribuciones que adeudan.

Ademas: si el ciudadano juez lo cree prudente, pide que se reciba este negocio á prueba, mandando que se compulse copia autorizada de los documentos que obran en un juicio contencioso, que el que suscribe defiende contra el Lic. D. Pedro S. Padilla.

Mazatlan, Agosto 7 de 1875.—*L. Gaona.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mazatlan, Setiembre 4 de 1875.—Vistos: el escrito presentado por los Sres. Redo Hernandez y C^a y Francisca de P. Bustamante, solicitando amparo del acto del ciudadano administrador de rentas del distrito de Mazatlan, que rehusa recibir en moneda de cobre de un cuarto de real cada una, la cantidad de mil ciento cuarenta y cuatro pesos noventa y dos centavos, y les cobra ochenta y cuatro pesos cincuenta y tres centavos, por gastos de cobranza, y les apremia con embargo de sus bienes, con lo que creen violadas en sus personas, las garantías otorgadas en el art. 27 de la Constitucion, é invadida la esfera de la autoridad federal, con violacion de la fraccion 23 del artículo 72 de la referida Constitucion, y del que piden la inmediata suspension: el auto asesorado de suspension: pro-

testa de la autoridad ejecutora al notificárselo: informe de ésta sobre lo principal, en que confiesa los hechos y funda su renuncia á recibir la moneda ofrecida en una ley del Estado de 26 de Diciembre de 1874, que lo prohíbe, y agregando por vía de alegato, que la moneda ofrecida, no representa valor alguno, y es notoria injusticia pretender obligar al Estado á recibirla, por no ser responsable de ella, y que por creerse falsa, los falsificadores no temen falsificarla, sin decir por eso que la ofrecida por los quejosos sea ó no falsificada; que en una noticia que remitió al juzgado con motivo de otro juicio, se demuestra que se ha amortizado una cantidad de cobre mayor que la expedida, y que los quejosos no han presentado dicha moneda á la jefatura de hacienda para su amortización, según aviso de ésta: el parecer fiscal que solo se refiere á otros que tiene presentados en los últimos juicios sobre igual materia y dá por reproducidos en éste, y son los mismos puntos próximamente, que los emitidos por la autoridad ejecutora en su informe: las pruebas rendidas, que son de parte de los quejosos, un certificado de la jefatura de hacienda, de tener en depósito cuatro mil novecientos diez y seis pesos noventa y tres centavos pertenecientes á los quejosos, y que no quisieron amortizar por intentar pagar con ellos; y por parte de la hacienda pública, los autos seguidos por el Lic. Pedro S. Padilla contra el administrador del timbre, para que reciba en pago de timbres moneda igual á la ofrecida aquí por los quejosos, en los que aparece un aviso de la jefatura de hacienda, para que amorticen la moneda de cobre sus tenedores á un cierto tipo, y los que no quieran la depositen: una noticia de la misma oficina manifestando el cobre amortizado y el depositado (incluyendo el depósito de los quejosos) y el emitido por la casa de moneda de Culiacan, que es menor que el primero en la cantidad de doce mil ciento cuarenta y cinco pesos cincuenta centavos, y correspondencia con el ministerio sobre la conveniencia de aumen-

tar la oferta hasta sesenta y cinco por ciento, para amortizar el cobre, en cuyos documentos basa su parecer el ciudadano promotor fiscal, para que se negue el amparo: la citación para sentencia, nombramiento de asesor, conformidad de los partes, alegato de los quejosos y todo lo demás que de autos consta y ver convino.

Considerando: que solo el Congreso de la Union está autorizado para fijar las condiciones de la moneda y establecer las casas en que se acuñe, y ninguna otra autoridad y funcionario puede emitir moneda, ni prohibir la circulación ó recepción de la moneda legalmente emitida, y por consiguiente, la Legislatura del Estado, al prohibir á las oficinas del mismo la recepción de la moneda de cobre ofrecida por los quejosos, invadió la esfera de la autoridad legislativa federal, en violación de la fracción 23 del art. 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos.

Que el ciudadano administrador de rentas del Distrito de Mazatlan al rehusar recibir á los quejosos la moneda legal que le ofrecen en pago de sus adeudos, les priva del uso y goce de su propiedad legalmente ejercitada, sin su consentimiento y sin previa indemnización, violando así las garantías que les otorga el art. 27 de la Constitución, y al declarar que dicha moneda no tiene valor alguno, invade la esfera de la autoridad federal, violando la fracción 23 del art. 72 de la referida Constitución.

Que los hechos permanecen inalterables con las pruebas ofrecidas por el ciudadano promotor fiscal, puesto que ni él, ni la autoridad ejecutora, prueban que la moneda ofrecida sea falsificada, ni alguno de ellos lo asevera siquiera, ni tal aseveración bastaría sin prueba, por ser un hecho que la requiere, ni tal prueba podría producirse en vista del certificado y noticia de la jefatura de hacienda que reconoce la moneda ofrecida por los quejosos como legal, y le dá el valor que la única autoridad competente en la materia, le dió al emitirla.

Que esta consideracion destruye los argumentos de la autoridad ejecutora en su informe, la que en un exceso de mal entendido celo, le niega el valor que el Congreso le dió y la gefatura de hacienda admite, insidiosamente pretendo declararla falsificada, porque advierte un exceso entre la emitida y la amortizada, mientras la oficina encargada de amortizarla, no hace observaciones sobre su legitimidad, y aventura la especie, que toda la moneda de cobre por creerse falsa, los falsificadores no temen falsificarla, lo que no está probado.

Que circunscrita la autoridad ejecutora á rendir el informe que se le pide, debe abstenerse de apreciaciones intempestivas y protestas innecesarias, como la hecha en este caso; «que el auto de suspension ataca la soberanía del Estado,» puesto que este Estado como todos los de la Union, está solemnemente comprometido en el pacto federal, á observar lo mandado por el pueblo de los Estados Unidos Mexicanos, en su acta constitutiva, que es la ley de la tierra por excelencia, y todas las autoridades de cualquier categoría, obligadas á cumplir religiosamente sus preceptos.

Con fundamento de lo expuesto y del art. 1º de la ley de 20 de Enero de 1869, que reglamenta los arts. 101 y 102 de la Constitucion, se declara:

La Justicia de la Union ampara y protege á los Sres. Redo Hernandez y Cº y Francisco G. Bustamante, del acto del C. Administrador de rentas del distrito de Mazatlan, que rehusa recibirles en moneda de cobre de un cuarto de real cada una, la cantidad de mil ciento cuarenta y cuatro pesos noventa y dos centavos que adeudan por derechos y contribuciones. Hágase saber: sáquense las copias de ley para su publicacion y remítanse los autos originales á la Suprema Corte de Justicia para su revision. El C. Alonso Morgado, tercer suplente del Juzgado de Distrito de Sinaloa, en ejercicio, de conformidad con el dictámen del C. asesor Lic. Carlos F. Galan, definitivamente

TOMO VII.—PARTE II.

juzgando, así lo decretó y firmó. Doy fé. —A. Morgado.—Francisco Medina, secretario.

Es copia. Mazatlan Octubre veintisiete de mil ochocientos setenta y cinco.—Francisco Medina, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Noviembre 22 de 1875.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Sinaloa, por los Señores Redo, Hernandez y compañía, en representacion de D. Francisco Perez Bustamante, contra el acto del administrador de rentas de Mazatlan, que se rehusa á recibirles en moneda de cobre, la cantidad de mil ciento cuarenta y cuatro pesos noventa y dos centavos que adeudan por derechos y contribuciones. Vista la sentencia del Juez de Distrito que otorgó el amparo, y las demás constancias que obran en autos y

Considerando: que consta por documentos oficiales, que el Ejecutivo de la Union ha retirado ya de la circulacion, en moneda de cobre de un cuarto de real, una cantidad igual á la que ha sido acuñada en la Casa de moneda de Culiacan desde el año de 1847 hasta la fecha, ya sea con permiso del Gobierno general, ó por Orden de las autoridades del Estado, y aun la que se acuñó por disposicion del Gefe rebelde D. Doroteo López; con mas un excedente de doce mil y tantos pesos.—Que por otra parte, el mismo ejecutivo federal, usando de las facultades extraordinarias de que está investido, ha declarado con fecha 25 de Setiembre anterior ocupada la moneda de cobre del tipo indicado que circula en Sinaloa, bajo el concepto de que se concederá la competente indemnizacion á los tenedores: Que habiendo cesado el curso legal de dicha moneda, ha cesado igualmente por parte de las autoridades de los Estados 6 del

Orden federal, la obligación de recibir monedas de esa especie en pago de contribuciones ó de cualquiera otro adeudo: que en consecuencia, la Administración de Rentas de Mazatlan, se ha negado con legítimo fundamento á recibir la moneda de cobre que ofrecían los quejosos, y por lo mismo, con esa negativa no ha infringido ningún precepto constitucional.

Por estas consideraciones, y con fundamento de los arts. 101 y 102 de la Constitución de la República, se decreta: Primero: Se revoca la sentencia pronunciada por el Juez de Distrito de Sinaloa en 4 de Setiembre del presente año. Segundo: La Justicia de la Unión no ampara ni protege á los Sres. Bedo, Hernandez y C^o y Francisco P. Bustamante, contra el acto del Administrador de rentas del Distrito de Mazatlan, que rehusa recibirles en moneda de cobre, la cantidad de mil ciento cuarenta y cuatro pesos noventa y dos centavos, que adendan por derechos y contribuciones.

Devuélvase las actuaciones al Juez de Distrito que las elevó á revision, acompañándole testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el Tocaí.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—José Arteaga.—Ignacio M. Altamirano.—M. Auza.—Ignacio Ramírez.—E. Montes.—José María Vigil.—Simon Guzman.—M. Zavala.—José García Ramírez.—Luis María Aguilar, secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 12 de 1876.—Enrique Landa, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes, por el C. Jesus Gomez Velez, albacea dativo de la testamentaria de la finada D^a Porfiria Dávalos, contra el C. Gefe de Hacienda del Estado, por violacion de los arts. 13, 16 y 27 de la Constitucion.

PEDIMENTO FISCAL.

El Promotor fiscal dice: que el C. Jesus Gomez Velez, como albacea de la testamentaria de D^a Porfiria Dávalos, presentó un escrito con fecha 9 del presente mes, solicitando amparo y proteccion de la Justicia federal, contra los procedimientos del C. Gefe Superior de Hacienda, relativos al remate de la finca urbana conocida con el título de la Escuela de Artes, y sobre los antecedentes al acto reclamado, solicitando á la vez su suspensión, por considerarse urgente el caso en cuestion. Presenta en su escrito, los hechos en que apoya su queja; cita algunas disposiciones que cree no se han observado y se han infringido en consecuencia; concluye manifestando, que se le debe otorgar el amparo que él solicita, en atencion á que el C. Gefe ya citado, con sus procedimientos ha violado en sus representados, las garantías que otorgan los arts. 16 y 27 de la Constitucion general de la República.

Por auto de 14 del corriente se mandó suspender el acto del remate, y que el Ciudadano Gefe de Hacienda rindiese el informe con justificacion dentro del término de la ley competente, y cuyo auto fué debidamente cumplimentado. En consecuencia, no tuvieron ya lugar la segunda y tercera almonedas citadas; se presentó el informe relacionado con sus respectivos comprobantes en doce fojas, el que destruye los hechos referidos en el escrito de queja y justifica la legalidad en los procedimientos de